

NACIONES UNIDAS

# Asamblea General

CUADRAGESIMO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES

*Documentos Oficiales*

COMISION POLITICA ESPECIAL

13a. sesión

celebrada el viernes

6 de noviembre de 1992

a las 10.00 horas

Nueva York

## ACTA TAQUIGRAFICA DE LA 13a. SESION

Presidente:

Sr. KHOUINI

(Túnez)

más tarde:

Sr. FUENTES IBAÑEZ  
(Vicepresidente)

(Bolivia)

## SUMARIO

TEMA 33 DEL PROGRAMA: POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

La presente acta está sujeta a correcciones.

Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750,

2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Distr. GENERAL

A/SPC/47/PV.13

6 de noviembre de 1992

ESPAÑOL

92-61783

5753V

Se abre la sesión a las 10.25 horas.

TEMA 33 DEL PROGRAMA

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Se recordará que, en relación con este tema, que será examinado directamente en sesión plenaria, la Asamblea General decidió que a las organizaciones y las personas que tengan un interés especial en la cuestión de apartheid se les permitirá ser escuchadas por la Comisión Política Especial. En su segunda sesión, del 9 de octubre, la Comisión decidió fijar el plazo del 22 de octubre para presentar solicitudes de audiencia y considerar todas las solicitudes recibidas hasta esa fecha en una sesión anterior a las audiencias. Las solicitudes de audiencia que aparecen en los documentos A/SPC/47/L.4 y Add.1 a 8 fueron ulteriormente aprobadas por la Comisión en su octava sesión celebrada el 30 de octubre.

Propongo que, de acuerdo con la práctica de años anteriores, la Comisión solicite actas literales de estas audiencias.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Formulo un llamamiento a todos los oradores que participen en las audiencias relativas al tema 33 del programa para que limiten sus comentarios al tema titulado "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica".

El primer orador es el Sr. Pheko, representante del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), a quien doy la palabra.

Sr. PHEKO (interpretación del inglés): Sr. Presidente: Le agradezco por permitirme hacer uso de la palabra ante la Comisión Política Especial en nombre del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), el auténtico custodio de las aspiraciones nacionales del desposeído pueblo de Azania.

La euforia sigue aumentando y el engaño se sigue difundiendo en el sentido de que el régimen de Sudáfrica tiene intenciones serias de efectuar cambios fundamentales en Sudáfrica. Personas que aducen estar comprometidas con el desmantelamiento del apartheid y con la destrucción del colonialismo plantean todo tipo de excusas para poder tener tratos con Sudáfrica. Los hechos revelan que esos cambios no son fundamentales y que no pueden desmantelar el apartheid.

El régimen sudafricano sigue engañando al mundo. He aquí algunos ejemplos acerca de la situación en Sudáfrica: hay más de 500 presos políticos y otros 310 permanecen en celdas para condenados a muerte, acusados de "crímenes" que dimanen del sistema colonialista de apartheid. El 16 de julio de 1992, el Sr. Pik Botha, Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, dijo ante el Consejo de Seguridad que todos los presos políticos habían sido puestos en libertad. No obstante, en fecha reciente el régimen puso en libertad a alrededor de 150 presos políticos, y anunció que pondría en libertad a los restantes antes del 15 de noviembre. Entretanto, el régimen de Sudáfrica ha presentado un proyecto de ley ante su parlamento racista y minoritario. En ese proyecto se dispone la indemnidad de todos los criminales del régimen de Sudáfrica, sin revelar su identidad ni la naturaleza de los crímenes que han cometido. Por consiguiente, el régimen está trocando sus criminales por presos políticos. Ello constituye una burda violación de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el África meridional, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 14 de diciembre de 1989. La liberación de los presos políticos era una condición

para la creación de un clima propicio para las negociaciones. La liberación de los presos políticos nunca fue tema de negociaciones.

En todo caso, permítaseme señalar a la atención de la Comisión el hecho de que entre los llamados presos políticos que fueron puestos en libertad en septiembre de 1992 figuraban criminales del régimen sudafricano. Uno de ellos es Barend Strydom. En noviembre de 1988 mató a balazos a ocho africanos inocentes, a plena luz del día y en el corazón de Pretoria. Tras haber sido puesto en libertad como "preso político", Strydom afirmó que si surgiera la necesidad volvería a matar. Dijo que creía que todos los días los africanos trataban de hacer retroceder al país. Para demostrar el carácter incorregible de su mente criminal, llamó a una conferencia de prensa y anunció sus intenciones en el preciso lugar en que en noviembre de 1988 había matado a las víctimas del apartheid.

Existe una violencia genocida en Sudáfrica. Cada día mueren 15 personas. Boipatong y Ciskei fueron sólo la punta del témpano. Se han producido más de 50 matanzas importantes desde que el Sr. De Klerk asumió la conducción de la Sudáfrica del apartheid. El Sr. De Klerk culpó de todo a la así llamada violencia entre negros. Negó que en sus cuarteles existieran el Batallón Búfalo 32, la Koevoet y otros mercenarios y escuadrones de la muerte. Pero el 15 de julio de 1992, en vísperas de la sesión del Consejo de Seguridad, anunció el desmantelamiento de esos instrumentos genocidas. No ha explicado cómo pudo desmantelar algo que no existía, algo con respecto a lo cual dijo no tener conocimiento alguno.

Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica están implicadas en la situación de violencia y desestabilización que existe actualmente en las comunidades sudafricanas, durante el llamado período de transición. En su informe para el período comprendido entre julio de 1990 y junio de 1992, la Comisión de Derechos Humanos denunció 5.700 incidentes de violencia conocidos. Otros muchos incidentes no son denunciados. Las fuerzas implicadas en esos incidentes son: fuerzas de seguridad, 1.790 incidentes; agrupaciones de las fuerzas de seguridad de Sudáfrica, 2.782 incidentes; escuadrones de choque, 225 incidentes; grupos derechistas blancos, 207 incidentes; y otros, 696 incidentes. Trescientas personas han sido baleadas al azar en trenes y autobuses.

El Sr. De Klerk usó también el referendo del 17 de marzo para engañar al mundo y hacerle creer que él tenía intenciones serias con respecto a la celebración de negociaciones genuinas. Pero, en realidad, tras ese referendo sumamente malentendido y malinterpretado el Parlamento sudafricano destinó 11.124 millones de rand de su presupuesto para su ejército. Además, el régimen asignó 5.000 millones de rand para operaciones secretas. Dicho monto no está sujeto a auditoría. Entretanto, los africanos oprimidos y desposeídos continúan muriendo como moscas, a pesar de que Sudáfrica cuenta con una fuerza policial integrada por 114.000 efectivos, que es la más numerosa de Africa pero que sólo protege a los blancos, mientras que los africanos quedan totalmente desprotegidos.

El PAC ha pedido que se expulsara del país a todos los mercenarios, y que dicha expulsión fuese verificada y sometida a supervisión internacional. El genocidio de africanos que el régimen de Sudáfrica comete a sangre fría está acompañado por un reclutamiento en masa de inmigrantes, provenientes en especial de países de Europa oriental. La matanza de africanos tiene el objetivo de reducir el número de la población africana. Se debe poner fin al reclutamiento de inmigrantes europeos hasta que exista una nueva Constitución democrática y un gobierno de la mayoría, elegido democráticamente, asuma el poder.

Cabe señalar también que, a pesar del Acuerdo Nacional de Paz, sigue muriendo gente, y que sólo los africanos frecuentan los cementerios con monótona regularidad. La Comisión Goldstone fue designada por el régimen de Sudáfrica. Esa Comisión lleva ante sí a las víctimas del apartheid, y no a quienes perpetran la violencia genocida.

El régimen sudafricano ha engañado al mundo con frases dulces con el fin de ocultar su doble programa, que consiste en perpetuar el gobierno minoritario del apartheid bajo un disfraz diferente. Algunas de esas frases son "Acuerdo Nacional de Paz", "Convención para una Sudáfrica Democrática", "zonas de disturbios", "gobierno provisional", etc. "Zonas de disturbios" es el término que utiliza el régimen para el estado de emergencia. Recientemente se declaró el estado de emergencia en zonas tales como Cradock, Uitenhage, Port Elizabeth, y otras, bajo el encabezamiento de "zonas de disturbios".

El régimen sudafricano ha desafiado con impunidad la Declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1989. El régimen se ha resistido a elaborar una Constitución mediante una asamblea constituyente elegida en forma democrática. El régimen está organizando ahora un engaño político, al que llama "gobierno provisional" y al que controlará del mismo modo en que lo hizo con la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA). Por consiguiente, el objetivo principal del "gobierno provisional" consistiría en demorar la elaboración de la nueva Constitución y prolongar el imperio de la minoría racista y la opresión de la mayoría autóctona africana, que está privada del derecho a votar.

El motivo real por el que el régimen de Sudáfrica está a favor de un "gobierno provisional" pero no de una nueva Constitución que otorgue a la mayoría sudafricana el derecho de votar radica en que, de conformidad con la Constitución del apartheid aprobada en 1983, se deberían celebrar elecciones en marzo de 1994. El régimen abriga la esperanza de que un "gobierno provisional" pueda conseguir el levantamiento de las sanciones. Con unos pocos rostros negros en ese gobierno, el régimen confía en poder engañar una vez más al mundo en el sentido de que está desmantelando el apartheid. Ello permitirá también que el régimen declare un estado de emergencia, arreste sin juicio a quienes se oponen al apartheid y se legitime a sí mismo.

El PAC le ha dicho al régimen que no acepta el llamado "gobierno provisional", pero que acepta una autoridad de transición en cuya supervisión participe la comunidad internacional, es decir, la Organización de la Unidad Africana (OUA), las Naciones Unidas y todas las organizaciones políticas que deseen apoyar la celebración de elecciones para una asamblea constituyente encargada de redactar la nueva Constitución.

El objetivo de la autoridad de transición es identificar los aspectos que tengan un efecto directo en la transición. La idea es tener una participación internacional y local para garantizar la transición electoral democrática libre y justa.

El PAC ha identificado cuatro esferas de la siguiente forma: la supervisión de la elección para una asamblea constituyente; el control de los medios electrónicos de comunicación, radio y televisión de propiedad pública; el control de las fuerzas de seguridad y el control de áreas definidas del presupuesto relacionadas más específicamente con los aspectos mencionados.

La idea es no entrar en temas que no se relacionen directamente con la transición. Durante el período de transición, se debe seguir considerando al régimen de Sudáfrica como una estructura colonial ilegítima minoritaria. No se debe permitir que se convierta en un supuesto gobierno provisional y pueda pedir financiación al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros. Esta asistencia financiera sólo se debe otorgar cuando se vea que el Gobierno está basado en una nueva constitución, elaborada democráticamente y aprobada de conformidad con las aspiraciones nacionales de la mayoría africana desposeída y con la Declaración de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1989.

La propia Declaración de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1989 se refiere, entre otras cosas, a

"Arreglos de transición convenidos y modalidades convenidas para el proceso de redacción y aprobación de la nueva constitución y para la transición hacia el orden democrático, incluida la celebración de elecciones." (resolución S-16/1, párr. 8 c))

La Declaración dice que esto indicaría la irreversibilidad del desmantelamiento del apartheid, no un simple llamado gobierno provisional en el que De Klerk sea jugador y árbitro, como lo hizo en la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA).

El año pasado, debido a la euforia estimulada por el régimen sudafricano y sus amigos, las resoluciones de las Naciones Unidas se diluyeron mucho. Ha pasado un año y todo lo que tienen las víctimas del apartheid es la muerte y la reducción de su población, mientras los blancos practican su rugby, su tenis, etc., incluso en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entre la euforia de los llamados numerosos cambios positivos en Sudáfrica, el Sr. F. W. de Klerk

recibió un premio tras otro y fue objeto de tratos privilegiados siempre que salió de la Sudáfrica del apartheid.

El boicot de los deportes también fue levantado. El PAC se opuso al levantamiento de ese boicot. Todavía nos oponemos. Consideramos que es injusto, para decirlo suavemente, que a cambio del genocidio del régimen contra nuestro pueblo se les permita jugar su rugby, su cricket, su tenis, etc., mientras nosotros morimos como moscas. El contingente sudafricano fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona mientras nosotros enterrábamos a las víctimas de las masacres de Boipatong y otras. Entre las víctimas de la masacre de Boipatong estaban la Sra. Elizabeth Ndamase, una abuela de 85 años de edad, Aaron Mothope, un niño de 9 años y varias mujeres embarazadas.

Sudáfrica envió a los Juegos Olímpicos de Barcelona a 10 africanos solamente y 86 blancos. Esto en un país en que los blancos constituyen sólo el 13 por ciento de la población del país. La Srta. Cheryl Robert participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aquí está resumido su testimonio:

"Nosotros éramos el único país que tenía dos banderas, una la bandera del Comité Olímpico Internacional de Sudáfrica (COIS) y, por supuesto, la bandera de la Sudáfrica del apartheid, que estaba siempre presente con los sudafricanos blancos. Aunque todos conocían las condiciones bajo las cuales competíamos, varios condenaron abiertamente la bandera del COIS, mientras que otros la ridiculizaron.

¿Para qué sirven las medallas si no podemos enarbolar la bandera sudafricana?, dijo una atleta a su preparadora. Cuando regresamos a Sudáfrica nos recibieron dos grupos de sudafricanos; los negros celebraban por los miembros negros, que por cierto disfrutaron la falta de oposición.

Pensé: ¿cómo pudimos engañarnos? Durante tres semanas le dijimos al mundo que éramos un equipo unido, pero en el aeropuerto Jan Smuts todos pudimos ver la realidad ... Si el problema de la bandera fue una píldora difícil de tragar, la idea de nuestras zonas menos favorecidas fue peor aún. Cuando los blancos se dirigieron a los suburbios ricos nos enfrentamos a la realidad. Estuvimos unidos durante tres semanas porque todos teníamos acceso a los mismos servicios en las Olimpiadas, pero de vuelta en Sudáfrica la situación era la misma de antes."



Hasta la fecha el régimen sudafricano no ha abolido la Ley de inscripción de la población ni la Ley de seguridad interna. Simplemente las ha enmendado, con total desprecio por la Declaración de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1989. El 21 de octubre de 1992 varios miembros del PAC fueron detenidos en virtud de la Ley de seguridad interna. Entre ellos estaba Johannes Jikila, Presidente de la Rama de Orange Free State Region, el Sr. David Matshoane y Petrus Motlatsi Morollwane. Los exiliados que regresaron fueron hostigados y muchos han sido asesinados. En realidad, el Comité Nacional de Coordinación para la Repatriación de Exiliados ha confirmado que el proceso de repatriación ha sido afectado negativamente debido al hostigamiento. Y muchos exiliados que regresaron están dejando Sudáfrica nuevamente.

Ciertas fuerzas están intentando traicionar a las víctimas del apartheid, pretendiendo falsamente que el apartheid ha muerto. Esto no es cierto. La verdad es que esas fuerzas están cuidando sus propios intereses y no los de las víctimas del apartheid. El PAC no permitirá que las víctimas del apartheid y del colonialismo en Sudáfrica sean traicionadas. Como dijo nuestro Presidente fundador, el profesor Mangaliso Robert Sobukwe: no nos desviaremos. No retrocederemos. No comprometeremos los intereses de los oprimidos. No cejaremos. No nos equivocaremos. Y triunfaremos.

Los que se dejan deslumbrar por los cambios cosméticos y superficiales en Sudáfrica y afirman que el apartheid ha muerto deben mostrarnos el cadáver. También tienen que decirnos cuáles son los perpetradores del apartheid que han sido acusados por este crimen de lesa humanidad según la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Doy ahora la palabra al Sr. Dennis Frado, representante de la Lutheran World Federation.

Sr. FRADO (interpretación del inglés): Me llamo Dennis Frado y soy el Representante Principal de la Lutheran World Federation en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Antes de empezar mi declaración, quisiera expresar ante todo la gratitud de mi organización por la oportunidad de dirigirme hoy a la Comisión, y los mejores deseos por la culminación con éxito de la labor de la Comisión.

La Lutheran World Federation (LWF) es una organización no gubernamental con categoría consultiva ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Nuestras 114 iglesias miembros están integradas por unos 54 millones de personas. Tenemos tres iglesias miembros en Sudáfrica, con un total de unas 790.000 personas. La gran mayoría de los miembros de estas iglesias son negros sudafricanos, víctimas del apartheid.

La práctica del apartheid ha planteado un serio desafío a la iglesia. No sólo se trata que los miembros de nuestras iglesias sufren bajo el sistema de apartheid, sino que la ideología de este sistema tiene sus raíces en una interpretación errónea de la Biblia y de las enseñanzas cristianas. Cuando los primeros partidarios del apartheid dijeron que la separación de las razas obedecía a la voluntad de Dios, era un reto directo a las iglesias de otras partes para que dijeran si su comprensión de la fe era la misma. La respuesta fue un rotundo "no". En nuestra opinión, la fe cristiana enseña que todos somos iguales ante Dios. Esta comunidad esencial de todos los seres humanos trasciende los límites de raza, color, idioma, cultura y geografía. Nadie es mejor que otro por el color de la piel.

Aunque esta enseñanza parece obvia, para algunos, no obstante, ha sido difícil de aceptar. Dos de nuestras iglesias miembros de la región sudafricana son comparativamente pequeñas, en gran medida iglesias blancas de origen alemán. Una de ellas tiene congregaciones en Sudáfrica, mientras que la otra las tiene en Sudáfrica y en Namibia.

Debido a que estas congregaciones no habían rechazado pública e inequívocamente el sistema de apartheid ni puesto fin a la división de la iglesia por motivos raciales, se suspendió su carácter de miembros de la Federación Luterana Mundial en 1984. Si bien se restituyó a dichas iglesias su condición de miembros el año pasado, esa medida se adoptó sólo tras una serie de visitas pastorales durante varios años, que tuvieron por resultado el rechazo público del apartheid por esas iglesias y el despliegue de esfuerzos concretos para integrar la labor de las iglesias luteranas en Sudáfrica.

Al suspenderse la condición de miembros de esas iglesias en 1984, la Asamblea de la Federación Luterana Mundial instó a todas las iglesias miembros de la Federación a adoptar medidas tangibles y concretas, incluidos el boicot de bienes y el retiro de las inversiones, con el objeto de poner fin a todo apoyo económico y cultural del apartheid. También se las exhortó a propugnar la imposición de sanciones contra Sudáfrica por sus gobiernos hasta que el apartheid quedara totalmente desmantelado. La Asamblea también reafirmó el compromiso de la Federación de apoyar un cambio pacífico y positivo hacia la igualdad de todos los miembros de las sociedades del Africa meridional.

En 1990, el Consejo de la Federación formuló una declaración sobre las sanciones y la democracia en Sudáfrica, que expresó lo siguiente:

"La Federación Luterana Mundial apoya la lucha en pro del logro de un Estado justo, unido, no racial y democrático en Sudáfrica, sobre la base de los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1989, entre los que se encuentran los siguientes:

Sudáfrica se convertirá en un Estado unido, democrático y no racial; todo su pueblo disfrutará del derecho a la ciudadanía y la nacionalidad, en pie de igualdad, sin distinción por motivos de raza, color, sexo o credo; todo su pueblo tendrá derecho a participar en el gobierno y en la administración del país sobre la base del sufragio universal en pie de igualdad, con un registro electoral no racial, mediante votación secreta, en una Sudáfrica unida y no fragmentada; todos tendrán derecho a fundar e integrar los partidos políticos de su elección, siempre que ello no signifique el fomento del racismo; todos disfrutarán de los derechos humanos y de las libertades civiles reconocidos universalmente, amparados por una declaración explícita de derechos; Sudáfrica tendrá un sistema jurídico que garantizará la igualdad de todos ante la ley; Sudáfrica

tendrá un sistema judicial independiente y no racial; se creará un orden económico que promoverá y fomentará el bienestar de todos los sudafricanos; una Sudáfrica democrática respetará los derechos, la soberanía y la integridad territorial de todos los países y aplicará una política de paz, amistad y cooperación beneficiosa con todos los pueblos.

La Federación Luterana Mundial está convencida de que las sanciones contra Sudáfrica sólo podrán suspenderse cuando se apruebe una constitución basada en estos principios."

Hoy estoy aquí en respuesta a ese mandato.

Quizá uno de los elementos más perturbadores de la situación actual en Sudáfrica sea el hecho de que el año pasado haya continuado la violencia y se haya intensificado en algunos aspectos. El Gobierno de Sudáfrica es el principal responsable de esta situación, tanto en forma indirecta al financiar y entrenar a los agresores, obstaculizando el proceso de transición hacia un Estado no racial y democrático, como, en algunos casos, en forma directa mediante los actos de sus fuerzas de seguridad. Si bien cada herida o muerte está arraigada en el legado del apartheid y es condenable, es realmente aterrador el hecho de que este año hayan ocurrido matanzas tales como las de Boipatong, Bisho y Folwani. Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno para que aplique la ley de manera uniforme, investigue plenamente éstos y otros incidentes y juzgue a los responsables.\*

Asimismo, exhortamos a los dirigentes del Congreso Nacional Africano (ANC) a que continúen su investigación sobre las violaciones de derechos humanos que, según se informó, tuvieron lugar en campos de detención en diversos Estados africanos. Si bien la necesidad de seguridad puede entenderse ante la infiltración continua de los que se oponen a la lucha de liberación, no puede justificarse el trato degradante al que aparentemente se vieron sometidos algunos sospechosos. Debe denunciarse y juzgarse a quienes sean hallados responsables de estas atrocidades. Encomiamos al Presidente del ANC, Sr. Nelson Mandela, por su prudencia acerca de las denuncias y el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional del ANC de aplicar las recomendaciones de la comisión de investigación.

---

\* El Sr. Fuentes Ibáñez (Bolivia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Hacemos un llamamiento a todos los sudafricanos para que actúen con suma moderación y se abstengan de cometer actos de violencia.

Pese a que se han eliminado ciertos aspectos jurídicos del sistema de apartheid, no se han adoptado las medidas económicas y políticas correspondientes para corregir los problemas profundamente arraigados. Por ejemplo, se han dejado sin efecto las leyes relativas a la propiedad de la tierra, pero no se ha adoptado medida alguna para restituir las tierras a quienes fueron despojados de ellas. Tampoco se han establecido programas significativos que permitan adquirir tierra a quien lo desee. El régimen blanco sigue controlando la policía y las fuerzas de seguridad. Los aliados blancos del Gobierno también controlan ampliamente los medios de información.

La propuesta de amnistía, presentada en el Parlamento pero rechazada por éste, y posteriormente aprobada por el Consejo de Estado del Presidente, ha sido desacreditada por una serie de dirigentes religiosos por sugerir efectivamente que puede conducir a que se garantice el perdón propio. También fue rechazada por menoscabar el respeto del derecho en una sociedad democrática futura, ya que pareciera otorgar preeminencia a algunas personas y al Gobierno respecto de la ley.

Aunque se han llevado a cabo negociaciones en las últimas semanas entre varios protagonistas políticos clave en Sudáfrica, no se logró una nueva convocatoria de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA). La CODESA es un foro representativo dentro de cuyo marco pueden realizarse progresos en el proceso de negociaciones para la elección de una asamblea constituyente. Por cierto, un luterano sudafricano destacado, Dean Tshenuwani Simon Farisani, ha participado activamente en la CODESA.

Pese a que la situación en Sudáfrica sigue siendo muy grave, en los últimos meses se han llevado a cabo actividades alentadoras a nivel internacional. Estas incluyen la adopción de decisiones por diversas instituciones tendientes a tomar medidas para desalentar la violencia en Sudáfrica. Encomiamos al Consejo de Seguridad por su resolución 765 (1992), de 16 de julio de 1992, en la que se invita al Secretario General a designar un Representante Especial, y por su resolución 772 (1992), de 17 de agosto de 1992, que autoriza al Secretario General a enviar grupos de observadores para contribuir a evitar la violencia. Aunque se han enviado varios

observadores, a nuestro juicio sería conveniente que las Naciones Unidas aumenten su número y presencia para mejorar su eficacia.

Asimismo, tomamos nota con satisfacción de la reciente decisión del Secretario General de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de nombrar un representante especial en Sudáfrica para coordinar el despliegue y las actividades de los observadores de la OUA en ese país.

La Federación Luterana Mundial ha apoyado el Programa Ecuménico de Observación en Sudáfrica, un esfuerzo conjunto del Consejo Sudafricano de Iglesias y la Conferencia Católica de Obispos del Africa Meridional en cooperación con sus asociados del exterior. El Programa de Observación proporciona un mecanismo para la vigilancia de la violencia en Sudáfrica dentro del contexto amplio de los procesos políticos. Realizará un seguimiento del proceso de negociaciones sobre una transición pacífica hacia una Sudáfrica democrática y no racial e informará al respecto. También controlará los procedimientos electorales establecidos por los asociados en las negociaciones a fin de asistir a todos los sudafricanos a participar en el proceso electoral, y presentará información sobre ello.

Los primeros observadores ecuménicos, un grupo de personas eminentes, publicaron un informe notable a fines de septiembre pasado. Hallaron que en todos los sitios que visitaron en Sudáfrica la gente confirmó la necesidad de esos observadores, "porque su presencia misma tenía influencia en la reducción de la violencia". Agregaron que

"Se nos dijo que es posible calcular estadísticamente la reducción de los incidentes violentos, en especial en las demostraciones multitudinarias, cuando están presentes los observadores."

Entre sus recomendaciones se contó la creación de un gobierno interino de duración limitada que tendría a su cargo la supervisión de la administración de justicia y la rápida transición a un gobierno representativo y democrático. Dijeron también que, si bien el acuerdo nacional de paz sigue siendo el marco adecuado para resolver el problema de la violencia, habían oído decir a muchas personas que sus mecanismos y su funcionamiento tienen serias fallas. Dijeron que, aun cuando algunos habían firmado el acuerdo, hacen caso omiso de sus principios. También tenían la impresión de que el acuerdo no exige al Gobierno y sus estructuras en el país el mismo grado de responsabilidad que a la comunidad negra. Llegaron a la conclusión de que el acuerdo debe aplicarse de manera imparcial.

El año pasado, el Consejo de la Federación Luterana Mundial alentó a las iglesias que lo conforman a examinar la declaración formulada en febrero de 1991 por la Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias, que tuvo lugar en Canberra, Australia. Este último dio a conocer varias recomendaciones, cuyos aspectos principales la comunidad internacional todavía debería respetar; en primer lugar, mantener las sanciones y continuar las campañas de desinversión de los bancos y empresas transnacionales hasta que sean abolidas las leyes del apartheid y la desaparición del apartheid se declare irreversible; en segundo lugar, proveer información fidedigna acerca de la situación de Sudáfrica y, en tercer lugar, trabajar en estrecha cooperación con organizaciones no gubernamentales nativas sudafricanas a fin de aplicar los programas destinados a repatriar y reubicar a los exiliados que vuelven al país y de desarrollar planes para la reconstrucción social en la Sudáfrica posterior al apartheid.

A fines del mes pasado, durante la reunión de la All Africa Conference of Churches en Harare, el Arzobispo Desmond Tutu subrayó la urgente necesidad de un gobierno interino y de elecciones para celebrar una asamblea constituyente. Señaló:

"No podemos permitirnos demoras. Cada día que pasamos sin resolver la crisis sudafricana representa un aumento de las víctimas fatales entre nuestro pueblo."

Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de compartir nuestro parecer con la Comisión.

El PRESIDENTE: Cedo ahora la palabra a la Sra. Donna Katzin, representante del Interfaith Center on Corporate Responsibility.

Sra. KATZIN (interpretación del inglés): Mi nombre es Donna Katzin, soy Directora de Programas para Sudáfrica del Interfaith Center on Corporate Responsibility. Tengo el honor de hacer uso de la palabra esta mañana en nombre de este grupo, que lleva ya 20 años, de 250 participantes institucionales y religiosos estadounidenses y canadienses.

Al recordar los acontecimientos registrados el año pasado en Sudáfrica, hay mucho para celebrar, pero quizás más aún para lamentar. El Gobierno sudafricano ha derogado ciertas disposiciones sobre el apartheid y ha participado en la Convención para una Sudáfrica Democrática. También ha consentido en restringir el uso de armas culturales, controlar los albergues y liberar a los presos políticos; la comunidad internacional debería asegurarse de que Pretoria cumpla estos compromisos.

Sin embargo, las estructuras del apartheid en Sudáfrica siguen firmemente en pie. Las actuales presiones internacionales son cruciales para alcanzar el objetivo fundamental, todavía no logrado, establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional (resolución S-16/1): la transformación de Sudáfrica en un Estado unido, democrático y no racial.

Hay obstáculos en el camino hacia la democracia. Aunque la mayoría del pueblo de Sudáfrica y la comunidad internacional desean urgentemente que Sudáfrica se encuentre próxima a alcanzar la democracia y la paz, todavía no ha ocurrido así. Las masacres de Boipatong y Bisho, fomentadas por el Gobierno, agregaron más de 70 víctimas a la lista de sudafricanos muertos, especialmente gente de color, que supera ya las 7.000 personas desde que Nelson Mandela fue excarcelado, en una avalancha de violencia que el Gobierno en algunas ocasiones no ha podido, y en otras no ha querido, detener.

El pasado viernes, 30 de octubre el South African Council of Churches emitió una declaración que comienza de la siguiente forma:

"El South African Council of Churches teme que la constante violencia en Natal conduzca a una guerra civil en la región, que se propague luego a todo el país. Nos preocupa también que, para enfrentar



esta situación, se hayan desplegado esfuerzos que tanto se necesitan para la tarea de lograr un gobierno interino y una nueva legislación.

Las últimas muertes, incluida la de Reggie Hadebe, del Congreso Nacional Africano (ANC), sugieren que existe un plan siniestro para socavar el proceso de paz."

Quisiera recordar a la comunidad internacional que la muerte de 2.600 personas en Londres durante los bombardeos en la segunda guerra mundial fue considerada una tragedia de enormes proporciones y dio lugar a una campaña en favor de una respuesta militar internacional coordinada. La calamitosa situación sudafricana, que ya ha triplicado casi esa cantidad de víctimas, exige que la comunidad internacional haga todo lo posible por obligar a Pretoria a transferir el poder a un gobierno interino representativo, cosa que tendría que haber hecho hace tiempo, con la autoridad para establecer una democracia constitucional a la mayor brevedad posible.

Pretoria no toma las medidas necesarias para detener esta violencia y permite que la administración de los territorios patrios limite la actividad política y, además, continúa empleando otras tácticas para retrasar y entorpecer la democracia. Algunas de estas acciones tienen lugar entre bambalinas, tal como ocurrió en julio pasado, cuando varios empresarios progresistas sufrieron presiones del Gobierno para evitar que llegaran a un acuerdo con el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) a fin de coordinar medidas para acelerar los cambios políticos.

Hay otras medidas que también conspiran contra la voluntad de las partes de reconciliarse y llegar a un acuerdo político; entre ellas se cuentan iniciativas tales como la propuesta, ya mencionada, de conceder una amnistía general que comprenda, incluso, a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron atrocidades. Esta propuesta ha sido ampliamente rechazada por los movimientos de liberación de Sudáfrica, en las actuales circunstancias. Continúan los obstáculos que entorpecen el camino hacia la democracia y la transformación pacífica y la comunidad internacional tiene, por lo tanto, razones para dudar de la buena fe de Pretoria y de su voluntad de ceder poder.

Un ejemplo más reciente es la cuestión de la tierra. Resulta deplorable la decisión de Pretoria de vender tierras fiscales a compradores privados y

transferir parte de ellas a los territorios patrios de Kwazulu, Lebowa y QwaQwa, con lo cual se apoya, a esta altura de la historia, el sistema moralmente corrupto de los bantustanes.

En el proceso, el Estado no sólo impide la democracia al consolidar el poder político y económico, sino que también agota los recursos que el futuro gobierno democrático necesita desesperadamente para hacer frente al catastrófico legado social y económico del apartheid.

Además, la intransigencia de los actos y las políticas de Pretoria han contribuido a que la economía sudafricana se encuentre en su peor momento desde los años 1904 a 1908. La distorsionada economía sudafricana acaba de entrar en su tercer año de crecimiento negativo, con un ingreso per cápita en 1992 inferior al de 1977. El Ministro de Finanzas sudafricano, Derek Keys, informó en septiembre que la inversión fija bruta, que en 1989 representaba el 21 por ciento del producto interno bruto, descendió al 16 por ciento a mediados de 1992, lo cual significa que las empresas sudafricanas apenas cubren las inversiones necesarias para seguir funcionando.

Dado que los mercados económicos se han visto cercenados por el sojuzgamiento de la población mayoritaria, la productividad de la mano de obra de color ha sido fuertemente socavada por las políticas sobre educación, salud, tierra, vivienda y empleo del apartheid.

Mientras tanto, estructuras del apartheid duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas según la raza, un servicio civil engreído y operaciones encubiertas han burocratizado el presupuesto estatal y dilapidado recursos importantes con propósitos improductivos, de hecho destructivos. Para evadir las presiones internacionales, Pretoria también pagó una "prima de apartheid" sobre productos tales como el petróleo, y también instrumentó distintas políticas entre las que se cuenta una exagerada importación. Ambas medidas han costado a Pretoria entre 30.000 y 40.000 millones de rand.

Más aún, este descontrol de la economía nacional ha costado a Sudáfrica un 2 por ciento adicional de crecimiento (o 60.000 millones de rand) anual, según el Director de la South Africa Foundation. Estos factores han exacerbado los efectos dañinos de la sequía sudafricana y de la recesión internacional.

Finalmente, el clima de inversión violento y volátil siguió desalentando nuevos préstamos a largo plazo y también la inversión en Sudáfrica, y excluyó efectivamente al país de importantes mercados financieros internacionales. El Ministro de Finanzas sudafricano, Derek Keys, expresó el mes pasado que antes de que la economía pueda retomar un saludable crecimiento es necesario que se instale un gobierno interino representativo y que termine la violencia.

Es claro que, si Pretoria sigue postergando el advenimiento de un gobierno interino representativo seguirá llenando sus morgues de cuerpos negros, seguirá devastando su economía y pondrá en peligro la posibilidad de que un Estado democrático y viable pueda surgir de las ruinas.

En este momento una serie de medidas estratégicas internacionales puede incrementar la presión sobre Pretoria para dar paso a la democracia. Por eso, en efecto, es por lo que nos reunimos aquí esta mañana. Además de las medidas políticas, son cruciales las presiones financieras y corporativas.

La historia de Sudáfrica desde 1985 ha demostrado que las presiones financieras se cuentan entre las más eficaces para inducir a Pretoria al cambio. Durante los meses venideros son necesarias las siguientes estrategias

financieras para obligar a Pretoria a finalizar con la violencia y proceder de buena fe para hacer más expeditiva la transición a un gobierno representativo.

Primero, los movimientos de liberación sudafricanos, federaciones sindicales y el Concilio Sudafricano de Iglesias han dicho que éste no es el momento para nuevos préstamos a ningún solicitante sudafricano. La asignación de nuevos préstamos da a Pretoria el peligroso indicio de que los cambios efectuados hasta la fecha son suficientes para obtener el apoyo moral y financiero de la comunidad internacional, y que no son necesarias más transformaciones. Deseamos elogiar a Morgan Guaranty por su decisión del año pasado de no ampliar un prematuro nuevo préstamo al South Africa's Independent Development Trust.

Si bien la mayoría de los préstamos a largo plazo no ha sido otorgada, de todos modos una cantidad de bancos europeos se ha comprometido a dar préstamos a corto plazo. Además, la comunidad internacional debe también desalentar nuevas inversiones en los bancos sudafricanos.

Segundo, dado que el tercer acuerdo interino de consolidación de la deuda sudafricana expira en 1993, es importante que los acreedores internacionales no lo renueven, a menos y hasta que haya un gobierno interino representativo.

Al refinanciar ese acuerdo condicionándolo a la formación de un gobierno interino, la banca internacional y quienes influyen en su comportamiento pueden acelerar la transición de Sudáfrica a la democracia y a la estabilidad económica.

Tercero, los bancos con importantes vínculos en Sudáfrica deben ser presionados ahora para que los interrumpan. Estos lazos no solamente incluyen inversiones y operaciones sino también relaciones transaccionales diarias tales como corresponsalía bancaria, lo que facilita las finanzas y el comercio. Deben hacerse más presiones hasta lograr que se corten estos vínculos. En los Estados Unidos, por ejemplo, bancos como Citibank, Chase Manhattan, Chemical Bank, Morgan y Bankers Trust mantienen vínculos de corresponsalía con bancos sudafricanos.

El Chemical Bank merece una atención especial por haber tomado la deliberada decisión durante el año pasado de reanudar la corresponsalía bancaria tras haber decidido, dos años atrás, cerrar sus cuentas de corresponsalía sudafricana. Cuando el Chemical se fusionó con el Manufacturers Hanover este año, lejos de preservar su propia política que

prohibía tales relaciones comerciales con los bancos sudafricanos, eligió mantener sus vínculos de corresponsalía. Es importante notar que el creciente aislamiento financiero sudafricano no sólo ejercerá presión sobre Pretoria para acelerar el establecimiento de un gobierno interino. También brindará apoyo a las campañas que se llevarán a cabo sobre el terreno. Por ejemplo, la South African National Civic Organization ha pedido a la banca internacional que no negocie con bancos del país, tales como el South Africa's First National - antiguo Barclay's - que sigue prestando dinero a Pretoria mientras discrimina en contra de los solicitantes nativos.

Cuarto, la comunidad internacional debe desalentar la salida de capital sudafricano, que será necesario con urgencia para reconstruir una Sudáfrica democrática. Recientemente la comunidad internacional ha vendido activos a un creciente número de compañías sudafricanas, las que han exportado capital para adquisiciones foráneas tales como el conglomerado Del Monte en los Estados Unidos, Hanover Papier en Alemania, Henry Ansbacher Holdings en el Reino Unido y el Allied Trust Bank en Gran Bretaña.

Es también decisivo que, además de los bancos, las corporaciones transnacionales no menoscaben otras presiones diplomáticas, legislativas y económicas orientadas al cambio sudafricano, invirtiendo nuevos capitales o ampliando las operaciones existentes allí antes que asuma un gobierno interino. Esto significa que las sanciones - como las que mantienen más de 150 localidades de los Estados Unidos - deben continuar, y también significa que deben continuar los esfuerzos de la comunidad internacional para desalentar nuevas inversiones en Sudáfrica hasta que se haya transferido el poder.

El esfuerzo no es demasiado ya que - al menos en los Estados Unidos - la mayoría de las compañías se niega a hacer nuevas inversiones hasta percibir un ambiente político y económico más estabilizado. La primavera pasada, el Interfaith Centre on Corporate Responsibility reunió declaraciones de varias compañías de los Estados Unidos manifestando su decisión de no ampliar sus operaciones ni invertir nuevos capitales extranjeros en Sudáfrica hasta el establecimiento de un gobierno interino o mecanismo similar.

Si bien es necesario ahora continuar con las presiones para asegurar que Sudáfrica transfiera el poder a un gobierno interino con la misión de llevar el país a una democracia constitucional, las estrategias internacionales deben

cambiar una vez que se establezca una autoridad de transición, una autoridad democrática. Una vez que tome su lugar un gobierno representativo, deberá comenzar a tratar el sobrecargado programa de democracia económica que dejará el legado del apartheid, deformación de desarrollo y mal manejo económico.

Para que un nuevo gobierno comience a ayudar a todo su pueblo a alcanzar lo proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas serán necesarias medidas adicionales. Las distorsiones son vertiginosas. Más de la mitad de los sudafricanos carece de empleo, mientras 16 millones - dos tercios de la población negra - viven por debajo de los niveles de subsistencia. Más de 4 millones de sudafricanos de color han sido desalojados de sus tierras, y 7 millones carecerán de hogar en el año 2000. Están disponibles muchas estadísticas más.

Así queda claro que serán cruciales las nuevas inversiones y un importante apoyo internacional para el desarrollo y la estabilidad de la nueva democracia política y económica de Sudáfrica. No obstante, esa causa no progresará con una desordenada política de inversiones por capricho de los inversores internacionales ni con los negocios al estilo de los que las corporaciones internacionales acostumbraron hacer durante el apartheid.

En lugar de ello, la comunidad internacional deberá guiarse por las prioridades y parámetros establecidos por medio del trabajo del pueblo de Sudáfrica y de las organizaciones democráticas. Ya que estas organizaciones en su mayoría fueron prohibidas en Sudáfrica cuando se redactaron los códigos del comportamiento corporativo, es ahora el momento de que las multinacionales se apresten a escuchar y observar tales modelos sudafricanos cuando estén afirmados.

Varios organismos de las Naciones Unidas merecen elogios por los pasos que han dado, previa consulta con organizaciones sudafricanas, para delinear la forma en que el sistema de las Naciones Unidas puede ayudar a Sudáfrica en la conducción de su programa socioeconómico, en delicada conjunción con la erradicación del apartheid. La conferencia de Windhoek, de mayo pasado, y la resolución 46/79 A de la Asamblea General, aprobada por consenso, fueron pasos importantes en esa dirección.

Hoy en día, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU), el Consejo de Iglesias Sudafricanas, la Conferencia de Obispos Católicos Sudafricanos y el Congreso Nacional Africano (ANC), han tomado medidas para establecer normas de conducta para las compañías nacionales e internacionales en el futuro. Aunque en el presente no todas han terminado en un solo documento, los principios de esas posiciones tienen componentes básicos comunes: acción afirmativa, tratamiento igualitario, derechos de los trabajadores, derecho a la educación y a la capacitación, protección del medio ambiente y programas de responsabilidad social comunitaria.

Estos principios pueden proporcionar un vehículo importante para fortalecer a la sociedad civil sudafricana y establecer las bases para una asociación dinámica entre compañías, comunidades, sindicatos y organizaciones religiosas y políticas, para el establecimiento de un nuevo orden político y económico. En el futuro, los gobiernos internacionales pueden apoyar estos mecanismos y ayudar a crear otros para promulgar y vigilar el cumplimiento de estas normas. Al hacerlo, ayudarán a asegurar que sus compañías respeten las normas internacionales, aportando así la contribución más eficaz para la reconstrucción sudafricana.

Mientras tanto, la comunidad internacional deberá fijar el rumbo. Las Naciones Unidas tienen que continuar apoyando el liderazgo y el papel positivo que desempeña la Comisión Especial contra el Apartheid y el Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid. La acción combinada de las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros es necesaria para hacer que Pretoria cumpla sus acuerdos y en apoyo a las fuerzas democráticas sudafricanas.

Para detener la violencia y asegurar que el futuro democrático de Sudáfrica no nazca muerto, nosotros, la comunidad internacional, debemos mantener la presión.

El PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la Sra. Vinie Burrows, representante de la Subcomisión para Africa Meridional del Comité de Derechos Humanos de las Organizaciones No Gubernamentales.

Sra. BURROWS (interpretación del inglés): En nombre de los miembros de la Subcomisión para Africa Meridional del Comité de Derechos Humanos de las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales están enumeradas al final de esta declaración, y en mi carácter de Presidenta del Subcomité, agradezco la oportunidad que se me brinda de dirigirme a la Comisión Política Especial. Somos un grupo diverso de activistas anti-apartheid, con miembros pertenecientes a comunidades religiosas, juveniles, femeninas, laborales, afronorteamericanas y afrocaribeñas. Estamos profundamente comprometidos a apoyar la lucha de la mayoría negra en Sudáfrica, así como la promoción de la aplicación de la histórica Declaración de las Naciones Unidas sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional aprobada por consenso.

El optimismo es un producto raro en la Sudáfrica de hoy. Dos años después del impulso dado por la presión interna y externa que empujara a De Klerk a legalizar más de 60 organizaciones restringidas, a liberar a Nelson Mandela y a otros presos y detenidos políticos, a disponer una moratoria de la pena de muerte por horca, a revocar la Ley de servicios residenciales separados, y a eliminar la mayoría de los reglamentos de emergencia. La pesadilla de la creciente violencia en las barriadas populares ha costado la vida a más de 8.000 negros y ha hecho descarrilar al foro de negociación extrapartidario de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA).

La herencia del sistema de apartheid y de la mentalidad de apertheid, que contempla el mundo a través de un lente oscuro, debe asumir la responsabilidad principal del terror estatal encubierto, que ha sido demostrado ampliamente en las masacres de Boipatong y Bisho. De Klerk debe reconocer la responsabilidad de su Gobierno por la "tercera fuerza" secreta, firmemente sostenida por la intriga policial e infiltrada en las Fuerzas de Defensa, las fuerzas de inteligencia y los sistemas de seguridad de Sudáfrica.

El territorio patrio de Ciskei es producto y creación del apartheid. Su misma existencia prueba que el apartheid no ha muerto, sino que está vivo y fuerte. De Klerk no puede escapar a la responsabilidad de las masacres



perpetradas en los territorios patrios. Existen pruebas claras, por ejemplo, de que las Fuerzas de Defensa de Ciskei, en colaboración abierta con las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, han llevado a cabo intensas incursiones, haciendo que la represión y la intimidación se convirtieran en el orden del día. Escuadrones de choque han lanzado ataques con granadas contra hogares de activistas y de miembros del Congreso Nacional Africano (ANC), en un patrón claramente establecido de matanzas y violencia.

Evidentemente, De Klerk carece de la voluntad política para montar una respuesta multinacional a fin de eliminar el salvajismo orquestado que ha causado la muerte de miles de personas y hace estragos en las vidas diarias de muchos miles más. Las matanzas y asesinatos han creado un problema creciente de refugiados que está llegando a proporciones alarmantes. Las mujeres y los niños, que son los miembros más vulnerables de la sociedad, han sido especialmente afectados.

Si bien la responsabilidad principal por la violencia corresponde al Gobierno, los dirigentes políticos de todos los sectores deben aceptar su obligación de reunirse sin demora y de mediar las diferencias. El Presidente Nelson Mandela del Congreso Nacional Africano ha reconocido prudentemente la necesidad de mantener la moderación y la disciplina, a pesar de la provocación extrema que innegablemente existe en muchos casos específicos. Su llamamiento ha tenido eco en la Conferencia de Iglesias Africanas, que ha sugerido que la Organización de la Unidad Africana asigne a la comunidad religiosa un papel más amplio en el proceso de instauración de la paz y en la reconciliación y reparación que deben tener lugar.

La posibilidad tan mencionada de una cumbre sobre la paz, dentro del contexto de conversaciones multipartidarias entre los firmantes del acuerdo de paz de 1991, es una iniciativa importante y responsable para poner fin a la violencia. La tarea ardua y de largo plazo de forjar una nueva Sudáfrica con un voto por persona está, en última instancia, en manos del pueblo negro y blanco de Sudáfrica. La economía en deterioro de la nación está siendo destruida por el actual estancamiento político y la recesión mundial. Un cuarto de millón de empleos se ha perdido en Sudáfrica en los tres años y medio pasados, el período de recesión más largo de los últimos 80 años. Las inversiones y las utilidades de las compañías están en el nivel más bajo alcanzado en 20 años. Han surgido insolvencias. La economía se reduce en 1992, por tercer año consecutivo.

El crecimiento anual es igual a cero. El desempleo, que llega al 40 por ciento en el caso de la población negra y al 10 por ciento en el caso de la blanca, está aumentando en ambos casos. Los políticos y economistas afirman que la única solución a largo plazo es el crecimiento económico, pero el país necesita primero una estabilización política. Dentro de estas circunstancias, la comunidad internacional puede jugar un papel decisivo ayudando a la República de Sudáfrica a desplazarse más rápidamente en dirección de un gobierno provisional y una asamblea constituyente. Es deplorable que algunos países hayan aflojado las presiones financieras, que tuvieron un impacto muy grande en la salud económica de la República de Sudáfrica. Instamos a que se sigan manteniendo sanciones económicas completas y obligatorias. Asimismo, instamos a que se continúen aplicando los embargos de armas y de petróleo.

El Comité Especial contra el Apartheid ha defendido una política doble, de presión contra las autoridades sudafricanas y de ofrecimiento al mismo tiempo de ayuda humanitaria, jurídica y educativa y de otras formas de asistencia a las víctimas y oponentes del apartheid. La sabiduría de esta política podría ser decisiva para lograr un cambio político irreversible en Sudáfrica y también para resolver algunas de las causas raíces del desequilibrio socioeconómico causado por el apartheid. La meta final es una nueva Sudáfrica democrática, donde no exista la discriminación por motivos de raza o sexo, que sería una adición bienvenida a la comunidad internacional que lucha en pro de la paz y la justicia para todos en este planeta.

Los siguientes miembros de la Subcomisión de Africa Meridional han firmado esta declaración: la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM); la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad (LIMPL); las Panteras Grises; the Sisters against South African Apartheid (las Hermanas contra el Apartheid de Sudáfrica); the National Baptist Convention of the United States of America, Incorporated; la Federación Sindical Mundial (FSM); the Brooklyn Church Center; la Federación Mundial de Mujeres Metodistas y el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural.

El PRESIDENTE: Agradezco a la Sra. Burrows su declaración en nombre de la Subcomisión de Africa Meridional, del Comité de Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales. La próxima oradora es la Sra. Beatriz von Roemer, que intervendrá en nombre de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

Sra. von ROEMER (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) (interpretación del inglés): Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la Comisión una vez más en nombre de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que representa a alrededor de 100 millones de trabajadores en todo el mundo.

Si hoy tenemos motivos para esperar que el sistema de apartheid se una pronto a la lista de regímenes crueles derrocados por la voluntad del pueblo, una gran parte del mérito le corresponde a los sindicatos independientes y no racistas de Sudáfrica. Ni el hostigamiento, ni el encarcelamiento o el miedo

a la muerte les han disuadido de su lucha heroica en pro de una Sudáfrica libre y democrática.

No obstante, hoy el movimiento sindical se enfrenta una vez más a una amenaza mortal, ya que la actual violencia en Sudáfrica se dirige claramente al movimiento democrático y tiene por objeto desestabilizar sus actividades. Los sindicalistas, los trabajadores y los dirigentes comunitarios han sido asesinados o sometidos a amenazas de muerte o a intentos de asesinato. Un reciente ejemplo tuvo lugar el 22 de octubre, cuando el Sr. Johnson Mpukumpa, secretario de la Western Cape Dwellers' Association resultó herido cuando tres hombres armados dispararon a su automóvil. La asociación participa en una serie de servicios comunitarios tales como el proporcionar asesoramiento jurídico a los trabajadores emigrantes, el establecimiento de una guardería infantil y la mejora de las instalaciones alrededor de los albergues. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres ha solicitado una investigación completa del tiroteo.

El pasado mes de abril la casa del Sr. Sipho Cele, secretario regional para el Natal septentrional del Congreso de Sindicatos Sudafricanos, fue destruida por una bomba y causó la muerte de un hombre. Este no fue el primer ataque contra el Sr. Cele. El Congreso de Sindicatos Sudafricanos informó de que su casa había sido previamente atacada por un grupo de vigilantes. A la mañana siguiente fue detenido por la policía que lo atacó gravemente. Mientras se encontraba en el hospital para que le trataran las heridas arrojaron bombas de petróleo en su casa.

En mayo, el Sr. Moses Mayekiso, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, y otros tres hombres fueron arrestados acusados de estar en posesión de dos pistolas que carecían de licencia. El Sr. Mayekiso y varios de sus colegas habían recibido amenazas y habían sido hostigados, lo que les hizo temer que los escuadrones de la muerte estaban conspirando contra sus vidas. El Congreso de Sindicatos Sudafricanos reveló que, a raíz de estas amenazas, el Sr. Mayekiso había solicitado a la policía una licencia de armas pero que no le habían respondido. Describió el arresto como parte de una

"campana de la policía y el Gobierno para despojarnos de todas las medidas que tomamos en un esfuerzo por defender nuestras vidas."

La matanza de Boipatung, en la que murieron 38 personas, sobresaltó al mundo el verano pasado. Suministró una prueba trágica de la falta de compromiso del Gobierno sudafricano para garantizar la paz y la seguridad en las barriadas y en todo el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica había sido advertido durante más de un año de que el albergue, un centro del Inkatha, cuyos residentes llevaron a cabo la matanza, se había convertido en una fuente de violencia. Ya se habían registrado 10 ataques previos por parte de internos del albergue contra residentes locales, en los que resultaron muertas 50 personas.

El Comité Coordinador sobre el Africa Meridional de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que celebró su 42a. reunión del 22 al 23 de octubre, manifestó profunda preocupación por la continuada violencia en Sudáfrica, la brutalización de la sociedad, la matanza de los sindicalistas y trabajadores y por el hecho de que la violencia hace imposible la libre actividad política y sindical. El Comité también reconoció que el Estado sudafricano y sus organismos, incluidas las fuerzas armadas y la policía, e inexplicables grupos siniestros, armados y financieramente independientes, son responsables de organizar la violencia y de crear falsas organizaciones con el objetivo determinado de desestabilizar el movimiento democrático. Los albergues con separación de hombres y mujeres, que resultan del sistema de emigración laboral del apartheid, son un instrumento en esta política.

Si bien reconoce que una solución a la violencia sólo puede lograrse mediante un arreglo político y la responsabilidad de las fuerzas armadas ante un gobierno democrático, el Comité pidió el procesamiento de los perpetradores de la violencia por la policía y el sistema judicial e instó a todas las fuerzas interesadas a que ejercieran moderación y buscaran una solución pacífica al conflicto político. El Comité celebró el papel creciente de la comunidad internacional en el control de la violencia en Sudáfrica, en especial la labor de las Naciones Unidas que ya han demostrado tener una influencia moderadora. Pidió un papel todavía más amplio de las Naciones Unidas en este proceso. Una presencia aumentada de las Naciones Unidas estaría de acuerdo con los objetivos del informe del Secretario General "Un Programa de Paz".

Por su parte, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres continuará apoyando el movimiento sindical democrático con todos los medios a nuestra disposición, desalentando firmemente la emigración a Sudáfrica y respaldando el proceso de negociación en Sudáfrica encaminado a crear un sociedad democrática basada en principios de igualdad y justicia social y pleno respeto de los derechos humanos y sindicales.

El PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el Sr. Denis Brutus, representante del Comité Olímpico No Racial de Sudáfrica.

Sr. BRUTUS (Comité Olímpico No Racial de Sudáfrica) (interpretación del inglés): Resulta adecuado en esta ocasión que exprese nuestras cordiales gracias a las Naciones Unidas y a sus organismos por los tremendos esfuerzos que se les han pedido para ayudar a la lucha en Sudáfrica con el fin de llegar a una sociedad justa y democrática.

También resulta oportuno en este momento agradecer los enormes esfuerzos realizados por el pueblo de Sudáfrica en nuestra lucha, y reconocer especialmente a los movimientos de liberación y al Congreso Nacional Africano (ANC) por su papel dirigente.

Aunque hay motivos de aprecio y gratitud, también hay que reconocer que la lucha aún no ha terminado y que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Por tanto, también es el momento de examinar las acciones que se han tomado y hacer ciertas preguntas sobre el ritmo de progreso. Estas preguntas las formula con ánimo de ayudar alguien que ha participado activamente en la lucha, tanto interna como externamente, y que cumplió condena en prisión en Robben Island con el Sr. Nelson Mandela, el Sr. Oliver Tambo, otros líderes del Congreso Nacional Africano (ANC) y otros participantes en la lucha de liberación.

Lo que resulta inquietante es observar que existe una impresión, muy difundida internacionalmente - que observé en el Japón, de donde acabo de regresar -, de que la lucha en Sudáfrica ha terminado y que se nos ha abierto el camino hacia una sociedad democrática. Se trata de una falsa impresión, ampliamente promovida por los medios de información, que debe ser corregida.

La verdad simple es que si bien Nelson Mandela fue liberado de la prisión en febrero de 1990, todavía no puede votar en su país. Esto se aplica a la mayoría de la población de Sudáfrica. Se trata de una situación intolerable, que se ve agravada por el hecho de que el Gobierno de De Klerk, apoyado por sus aliados - creaciones del apartheid -, continúa obstaculizando este proceso y se propone prolongarlo. Una clara prueba de ello apareció en una reciente declaración de la publicación This Week in South Africa, recopilada y producida por el Consulado General sudafricano en Nueva York, del 13 al 19 de octubre de 1992:

"El Ministro de Asuntos Constitucionales, Roelf Mayer, en el programa de televisión, 'Slabbert on Sunday', dijo que definitivamente no se celebrará una elección democrática antes del último trimestre de 1993."

Al mismo tiempo, la oposición al Gobierno del apartheid se ha empantanado en una serie de torpes conversaciones que han registrado poco progreso y que simplemente han contribuido a la confusión y el oscurantismo. Lo que es peor, están en la absurda posición de buscar apoyo entre los títeres y sustitutos del apartheid en sus esfuerzos por dismantelar el sistema de apartheid.

Quizás la más grave consecuencia de esto sea la profunda insatisfacción expresada diariamente por la mayoría de la población. Una carta reciente, de 29 de octubre de 1992, resume la posición:

"La situación en Sudáfrica sigue siendo muy mala. No vemos ninguna esperanza de que mejore en el futuro inmediato. Con los diversos grupos de poder maniobrando en pro de sus beneficios individuales, está la fórmula para una futura lucha ... sólo hay motivos para la desesperación."

Esto es igualmente cierto en materia de deportes, en la cual durante muchos años he desempeñado un papel directivo. La minoría blanca sigue aferrada a sus privilegios y es la principal beneficiaria de la finalización del boicot deportivo. Esto ha provocado una profunda insatisfacción entre el pueblo, insatisfacción que yo predije en una carta dirigida a Nelson Mandela en oportunidad de celebrarse la primera conferencia del Congreso Nacional

Africano (ANC) de Sudáfrica, cuando argumenté que la decisión era prematura. El cálculo cínico expresado por un vocero del ANC de que era "una forma de ganar los votos de los blancos", resultó ser falso y oportunista. Esto lo prueba la declaración que apareció en City Press, de 18 de octubre de 1992:

"Jacky Abraham, el único negro en la gira de la delegación sudafricana de rugby, no está seguro de haber tomado la decisión correcta al venir a Europa ... los sentimientos raciales todavía son muy manifiestos en la gira ... Nada sucede para los miles de jugadores negros y mestizos en la nueva generación ... Tenemos la impresión de que la reunificación sólo está ayudando a los blancos."

¿Qué hay que hacer? Hay que corregir la insatisfactoria situación actual. Debe haber un rápido avance hacia una democracia real. Las maniobras y las tácticas detrás del escenario deben terminar. Tiene que haber más consultas abiertas con la mayor parte de la población y una voluntad también mayor de consultar con ella y hacerla participar en el proceso de cambio. Esto incluye una honesta revisión de la política anterior y una deliberación franca sobre los errores y las estimaciones equivocadas del pasado.

Dicho sea de paso, algunos de estos errores son mencionados en el informe que acaba de presentar la Comisión de Deportes, a la cual le he prestado un apoyo sin reservas, que reconoce las equivocaciones y el progreso incompleto en la esfera de los deportes.

Finalmente, Sudáfrica se encuentra en una situación de crisis. Debe avanzar hacia una distribución nueva y justa o estará predestinada a una confusión trágica y sangrienta. El pueblo de Sudáfrica desea paz y justicia. Necesita una gran ayuda de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para avanzar hacia su objetivo.

El PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el último peticionario inscrito en la lista, el Sr. Tebogo Mafole, del Congreso Nacional Africano.

Sr. MAFOLE (Congreso Nacional Africano) (interpretación del inglés): El Congreso Nacional Africano tiene una gran deuda con la Comisión Política Especial por darle esta oportunidad de compartir con los miembros de esta Comisión sus preocupaciones y también las de millones de sudafricanos en cuanto a la explosiva situación que impera en nuestro país como consecuencia directa de la política de apartheid.



Han transcurrido tres años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara por consenso la histórica Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional. Como saben los miembros de esta Comisión, el objetivo fundamental que contempla la Declaración es la transformación de Sudáfrica en un país unido, democrático y no racista. Con este fin, los Estados Miembros sentaron la base para una solución aceptable internacionalmente del conflicto sudafricano. Al hacerlo, reconocieron que la concreción de este objetivo requería la creación de un ambiente en el cual pudiera llevarse a cabo un debate político libre. Por consiguiente, la Declaración obliga al régimen sudafricano a adoptar una serie de medidas destinadas a eliminar todos los obstáculos para la actividad política libre.

En el período transcurrido desde la aprobación de la Declaración, Sudáfrica ha sido el escenario de importantes acontecimientos políticos que, para bien o para mal, indudablemente han de modificar el panorama político de ese país. A pesar de estos cambios políticos, Sudáfrica sigue siendo hasta hoy un país gobernado por un régimen minoritario blanco, en el cual la enorme mayoría de la población no goza todavía del derecho a votar y a ser elegido en órganos de gobierno.

Por si fuera necesario recordar este hecho, su confirmación se produjo el 12 de octubre, cuando el régimen convocó su Parlamento minoritario e intentó imponer la llamada "Further indemnity bill", que rodeada de secreto, y por tanto, contraviniendo las normas internacionales, concedió una amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad culpables de delitos graves y enormes violaciones de los derechos humanos.

El régimen de Pretoria, a pesar de su campaña de propaganda concertada para aparecer como un miembro respetado de la comunidad internacional, no ha cumplido plenamente las disposiciones de la Declaración sobre el apartheid, especialmente por lo que respecta a la creación de un clima de libre actividad política. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la liberación de los prisioneros políticos y la derogación de la legislación que limita la libre actividad política.

Respecto a los prisioneros políticos, si bien celebramos la liberación de 150 y la perspectiva de la liberación de los restantes para el 15 de noviembre, como consecuencia del Acuerdo de Entendimiento logrado entre el régimen y el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica (ANC), nos preocupa mucho el cumplimiento por Pretoria de sus solemnes obligaciones.

La realidad política de Sudáfrica en sí proporciona motivos suficientes para desconfiar. En primer lugar, respecto a los prisioneros políticos, el régimen tiene un historial muy negativo, habiendo incumplido las obligaciones que le correspondían de conformidad con el Groote Schuur Minute, de mayo de 1990 y todos los demás acuerdos concertados con el ANC. El 2 de noviembre, el Ministro Adjunto de Ley y Orden anunció súbitamente que su Gobierno no erigiría barricadas en las zonas que habían sido identificadas como fuente de violencia, tal como se había convenido en el Acuerdo de Entendimiento. Esto ha cuestionado nuevamente la fiabilidad del régimen y alimentado la desconfianza hacia cualquier acuerdo logrado con Pretoria.

En segundo lugar, incluso mientras se llegaba a acuerdos sobre la liberación de prisioneros políticos, la muerte de personas bajo custodia policial está aumentando a un ritmo alarmante. La Comisión para los Derechos Humanos, una organización no gubernamental sudafricana, comunicó que desde enero de este año se habían producido 112 muertes. Sólo durante el mes de octubre se han registrado 15 muertes de este tipo. Esta situación se ha visto agravada porque el Ministro de Ley y Orden, respondiendo a presiones, prometió instituir una

comisión compuesta por magistrados retirados a fin de investigar estas muertes. Ya han transcurrido tres meses desde que hizo la promesa y todavía no se ven signos de ninguna comisión.

En tercer lugar, las afirmaciones sobre las intenciones del régimen de romper con su diabólico pasado de apartheid suenan a hueco a la luz de recientes revelaciones sobre las detenciones de niños. Una investigación realizada conjuntamente por el Centro de Derecho Comunitario, un organismo de la Universidad de Western Cape, Lawyers for Human Rights y la NICRO, publicada el mes pasado, reveló que en la actualidad existen unos 12.000 niños detenidos en las prisiones de Sudáfrica, muchos de los cuales no han sido acusados formalmente de ningún delito. Todavía más sorprendente fue la respuesta al informe. Un portavoz del Departamento de Servicios Correccionales confirmó el fondo del informe, pero rebatió la cifra, afirmando que la cifra correcta se acerca a los 10.000.

Por consiguiente, es claro que la comunidad internacional no puede asumir que la cuestión de los prisioneros políticos en Sudáfrica ha finalizado sólo debido al Acuerdo de Entendimiento. Deben ejercerse presiones para que el régimen cumpla sus obligaciones y libere realmente a todos los prisioneros políticos.

Otro problema grave respecto a la creación de un clima de actividad política libre es la existencia continuada en los estatutos sudafricanos de restos de legislación y disposiciones sobre seguridad que restringen gravemente la posibilidad de ejercer una actividad política libre y pacífica. Este estado de cosas también afecta a los denominados bantustanes independientes y a los estados con gobierno propio. Las tensiones surgidas, especialmente en áreas tales como Ciskei, Bophutatswana y Kwa-Zulu, son consecuencia directa de las políticas represoras de las autoridades de esas zonas. La comunidad internacional debe presionar al régimen para que elimine todas esas medidas represoras y respete el derecho de todos los sudafricanos a reunirse pacíficamente y a la libertad de pensamiento y palabra.

El factor individual más crítico para resolver los problemas políticos de nuestro país es la cuestión de la violencia. De hecho, es tan crucial que ya en 1989 la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional instó a las partes interesadas en Sudáfrica a:

"... negociar el futuro de su país y de su pueblo de buena fe y en una atmósfera que, por acuerdo mutuo entre los movimientos de liberación y el régimen de Sudáfrica, esté libre de violencia." (S-16/1, anexo, párr. 8)

Es lamentable que no se haya conseguido el clima libre de violencia que pretendía la Declaración. Por el contrario, cabe afirmar que desde la aprobación de la Declaración se ha producido un enorme aumento de la violencia motivada por la política. Según la Comisión para los Derechos Humanos, de julio de 1990 a junio de 1992 se produjeron en Sudáfrica 6.229 muertes causadas por la política, es decir, un total de nueve muertes al día.

En el mismo período se registraron 49 masacres y no menos de 128 asesinatos políticos. La situación se volvió tan grave que la reunión en la cumbre de la Organización de la Unidad Africana decidió solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que celebrara en julio una reunión especial para tratar la cuestión de la violencia.

No cabe duda que la reunión del Consejo de Seguridad, la aprobación por éste de resoluciones pertinentes, la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas por medio de su Representante Especial y el despliegue posterior de observadores de las Naciones Unidas para controlar la violencia en Sudáfrica fueron una contribución positiva para los esfuerzos por resolver esta cuestión. De hecho, puede afirmarse que estos esfuerzos han proporcionado el impulso necesario, que condujo a la reunión entre el Presidente del ANC, Sr. Mandela y el Presidente De Klerk, celebrada el 26 de septiembre.

Sin embargo, es motivo de grave preocupación que estos esfuerzos no hayan podido restañar la espiral de violencia. De hecho, existe amplia evidencia de que la violencia está causando estragos, especialmente en zonas de Natal y Witwatersrand, con un coste elevado en vidas y propiedades. El ataque sin sentido perpetrado la semana pasada en una reunión en Natal, que causó la muerte a más de 50 personas, el reciente asesinato de 10 personas en la barriada de Alexandra, el brutal ataque a pasajeros en los trenes, y otros actos de barbarie se han convertido en hechos alarmantemente comunes en la existencia diaria de nuestro pueblo.

La situación explosiva que prevalece en Sudáfrica asume una dimensión más estremecedora cuando se considera frente al entorno de las tensiones de nuestra región, y especialmente las luchas en Angola, que ya han causado la muerte de más de 1.000 personas sólo la pasada semana. La situación se vuelve incluso más ominosa teniendo en cuenta la evidencia de una relación entre los causantes de la violencia en zonas como Mozambique y en nuestro país.

En el caso de que alguien estuviera tentado de hacer caso omiso de estos informes por encontrarlos forzados, quisiéramos que considere lo siguiente:

Primero, un miembro destacado del Partido Inkatha de la Libertad (IFP), que, casualmente, también fue miembro de su delegación en las negociaciones celebradas bajo los auspicios de la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA), ha admitido públicamente que durante más de un año ha estado traficando con armas de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) para suministrarlas al brazo militar del IFP a fin de desestabilizar al Congreso Nacional Africano (ANC) y, con sus propias palabras, asegurarse de que en Sudáfrica no se crea un clima propicio para las elecciones. Se esperaba que esto permitiera a las organizaciones como la suya reunir apoyo para las elecciones que habrían de tener lugar más adelante.

Segundo, se ha informado persistentemente sobre la presencia de personas de habla portuguesa entre los grupos armados que han atacado a las personas en los trenes de cercanías.

Tercero, los medios de comunicación sudafricanos han informado ampliamente sobre la presencia en Natal de un contingente de luchadores de la RENAMO que, según se cree, están entrenando a luchadores del IFP. De hecho, se han detectado e identificado instalaciones de entrenamiento en ciertas localidades de Natal.

La gravedad de esta cuestión queda reflejada en el hecho de que la Comisión Goldstone ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre estos informes. A la luz de lo dicho, sólo puede llegarse a una conclusión: que el Africa meridional se está convirtiendo en uno de los más peligrosos focos de tirantez y constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Así pues, esto ha convertido la cuestión de hacer frente a la violencia en Sudáfrica en un asunto de extrema urgencia.

En un esfuerzo por hallar una solución al problema de la violencia, nosotros, el ANC, pensamos que las siguientes medidas son cruciales:

En primer lugar, todas las organizaciones y administraciones de Sudáfrica deben acatar plenamente las disposiciones del Acuerdo Nacional de Paz y las diversas directrices elaboradas por la Comisión Goldstone.

En segundo lugar, dado que la responsabilidad principal por el mantenimiento de la ley y el orden recae en el régimen sudafricano, éste debe ser obligado a asumir esa responsabilidad. Específicamente, debe cumplir las obligaciones especificadas en la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad.

En tercer lugar, el régimen debe ser obligado a cumplir los compromisos asumidos en virtud del acuerdo con el Congreso Nacional Africano, sobre todo respecto a los albergues y las llamadas "armas culturales", así como respecto a las recomendaciones hechas por la Comisión Goldstone y el Secretario General de las Naciones Unidas.

En cuarto lugar, reviste una importancia clave que las propias Naciones Unidas actúen con rapidez para aplicar la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad en su totalidad, incluidas aquellas partes que se refieren a la investigación de la conducta delictiva y el control de todas las agrupaciones armadas en el país.

En quinto lugar, aplaudimos que la Organización de la Unidad Africana (OUA) y el Commonwealth hayan actuado rápidamente para suplementar las actividades de las Naciones Unidas en Sudáfrica. Sin embargo, tenemos que hacer una advertencia contra el hecho de que las Naciones Unidas se valgan de esto como motivo para reducir su propia contribución. Al contrario, instamos a las Naciones Unidas a que no escatime esfuerzos para honrar las decisiones del Consejo de Seguridad a este respecto.

Permítaseme ahora abordar, aunque sea muy brevemente, la cuestión de las negociaciones. La comunidad internacional hizo valer todo su peso en el proceso de negociaciones que tuvo lugar dentro del contexto de la CODESA, precisamente porque se consideró, justamente, como el inicio de un resultado en el cual la Organización mundial había desempeñado un papel importante mediante la adopción de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el África meridional. Por consiguiente, el desmoronamiento experimentado en la segunda sesión plenaria de la CODESA suscitó graves preocupaciones. En nuestra opinión, una importante lección a aprender es que todos los partidos políticos participantes en las negociaciones deben comprometerse a llevar a la práctica la perspectiva representada por los

principios constitucionales contenidos en la Declaración, sin lo cual jamás alcanzarán ningún acuerdo que ponga fin eficazmente al sistema de apartheid y convierta Sudáfrica en una democracia no racista.

En la reunión celebrada el 26 de septiembre entre el régimen y el ANC se acordó, entre otras cosas, que se reanudarían las conversaciones bilaterales sobre cuestiones constitucionales entre las dos entidades. También se acordó que este proceso se ampliaría a otras organizaciones que han participado en las negociaciones constitucionales. Se ha anunciado que la fecha de inicio de tales conversaciones será el 22 de noviembre de 1992. Es importante mencionar que se ha alcanzado un amplio acuerdo sobre el hecho de que debe existir una asamblea constituyente electa y un gobierno interino. Este último se vería precedido por la creación de varios órganos ejecutivos estatutarios que garantizarían un terreno llano y la posibilidad de llevar a cabo elecciones libres y justas.

Hemos hecho todo lo posible por asegurar que no quepa duda sobre la posición del ANC en lo que se refiere a la evolución política de Sudáfrica. Es evidente que la solución del problema de nuestro país es fundamentalmente responsabilidad de los propios sudafricanos. No obstante, nos alienta que los pueblos del mundo se hayan comprometido solemnemente a hacer todo lo necesario para liberar al mundo del flagelo del apartheid.

Por consiguiente, instamos a los miembros de esta Comisión a hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse de que las medidas existentes contra el régimen se mantengan y que todo cambio en el statu quo se realice de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

Para terminar, quisiera aprovechar esta oportunidad, en nombre del ANC, para reiterar nuestra determinación de erradicar el apartheid y construir sobre esas cenizas una Sudáfrica verdaderamente no racista, unida y democrática. Al hacerlo, nos sentimos fortalecidos por la firme decisión de los millones de personas de nuestro pueblo cuyo anhelo de libertad no se arredra ante ningún sacrificio. También nos inspira en gran medida el heroísmo de todos aquellos que luchan por su autodeterminación en el Sáhara Occidental, Palestina y otras partes del mundo. A ellos deseamos rendir homenaje.

Finalmente, quisiéramos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas por la valiosa ayuda que continúan ofreciéndonos tanto en el nivel bilateral como multilateral. Estamos convencidos de que no está lejos el día en que una Sudáfrica democrática ocupe su lugar entre las naciones del mundo.

El PRESIDENTE: Esto pone fin al examen del tema 33 del programa. Nuestro Relator presentará el informe de la Comisión a la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.